

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **DIANA LUCÍA PALACIO MONTOYA**, contra la **SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S.A.** (En adelante SODEIMPRO S.A.), tramitado bajo el radicado No. **05001-31-05-014-2019-00442-01**.

El magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

A través del ejercicio de la presente acción judicial, la demandante pretende que se declare que entre ella y SODEIMPRO S.A., existió una relación laboral a término indefinido entre el 12 de octubre de 2012 y el 28 de julio de 2017. Que se declare que, como última retribución salarial, recibía la suma de \$3'000.000 de pesos. Que la empresa incumplió con su obligación de afiliación al Sistema de Seguridad Social en pensión, salud y riesgos laborales, así como el pago de prestaciones sociales por concepto de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Que se declare que la terminación del contrato de trabajo se debió a una decisión unilateral y sin justa causa por parte de la empresa, y que como consecuencia de ello le asiste derecho al pago de la indemnización por despido sin justa causa, a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del CST, y la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la omisión de consignación de cesantías y la indexación.

Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, relata la demandante que trabajó para la empresa SODEIMPRO S.A. desde el 12 de octubre de 2012 al 28 de

julio de 2017, desempeñando el cargo de asesora comercial, mediante un contrato verbal a término indefinido.

Aduce, que laboró bajo la dependencia y subordinación continua y permanente por parte de la empresa SODEIMPRO S.A. y que dentro de sus funciones estaban las de atender público, asesorar al cliente y diligenciar la papelería respectiva una vez el cliente toma la decisión de acceder a un crédito, y que, para el desempeño de su cargo, recibía ordenes de la señora LUZ AIDA RAMÍREZ, quien era la coordinadora del lugar.

Afirma que el 28 de julio de 2017, SODEIMPRO S.A. sin justa causa, dio por terminada la relación laboral.

Expone, que la sociedad demandada no cumplió con su obligación de pagar las prestaciones sociales tales como vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicio, y que nunca le exigió el pago de la seguridad social integral, requisito que debe ser indispensable para que se configure el contrato de naturaleza comercial.

Relata que, como retribución por el servicio prestado, devengaba una suma variable que dependía del pago de comisiones, no obstante, el último salario fue de \$3'000.000 de pesos.

Finalmente, expone que, en cumplimiento de sus actividades laborales, la empresa le asignó un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

El juez de primera instancia despachó de manera parcialmente favorable las pretensiones de la demanda. Declaró que, entre la demandante y la sociedad demandada, existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 12 de octubre de 2012 y el 28 de julio de 2017, el cual terminó de manera legal y normal.

Condenó a la sociedad SODEIMPRO S.A., a pagar a la demandante los siguientes conceptos:

- a). Por cesantías la suma de \$3.445.252
- b). Por intereses a la cesantía la suma de \$134.045
- c). Por prima de servicios la suma de \$1.313.257
- d). por vacaciones la suma de \$898.957

También condenó a ambas partes a contribuir, de conformidad con lo dispuesto en los porcentajes en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, con el cálculo actuarial correspondiente a las cotizaciones a la seguridad social en pensiones en el lapso comprendido entre 12 de octubre de 2012 al 28 de julio de 2017, tomando como ingreso base de cotización (en adelante IBC) el salario mínimo legal mensual vigente en cada anualidad. Absolvió a la demandada de las pretensiones encaminadas a las indemnizaciones por despido injusto y la moratoria consagrada, en los artículos 64 y 65 del CST. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas a la accionada en cuantía de 1 SMLMV.

Para arribar a tal conclusión, consideró el *a quo*, que en este caso para que se configure el contrato de prestación de servicios al que alude la sociedad accionada, este debe ser ajeno a la subordinación, lo que debe ser probado por el accionando ya que está aceptada la prestación personal del servicio. Concluyó que no se presentaban las características propias del contrato comercial, porque la demandante estaba sometida a órdenes de sus superiores, cumplía horario, tenía metas, no tenía autonomía como una persona que realiza una actividad comercial independiente, pues su labor no se limitaba a recibir los clientes, sino que debía atenderlos, analizar los documentos y las comisiones dependía de la suscripción del cliente. También argumentó el juez, que la relación laboral no fue excepcional, sino de manera permanente. En relación con la única testigo del proceso, indicó que, si bien ésta también tenía una demanda contra la sociedad accionada por parecidos hechos, no se podía descartar su testimonio, porque conoció de manera directa los hechos, además, su declaración fue locuaz y no incurrió en contradicciones.

Como conclusión de lo anterior, indicó el *a quo*, que al haberse admitido por la demandada los extremos de la relación laboral, declara la existencia de la misma. Declaró prescritos los derechos causados con anterioridad al 23 de noviembre de 2015, salvo el auxilio de cesantías y las vacaciones.

En cuanto al salario devengado, indicó que, por no existir prueba del mismo, se presumía el salario mínimo.

Absolvió del pago de la indemnización moratoria por falta de pago de prestaciones sociales, por considerar que la relación laboral estuvo en discusión al momento de acudir a la administración judicial, ya que la demandante no demostró haberle solicitado a la accionada sus derechos, de manera que SODEIMPRO S.A., tuvo el

convencimiento que con la demandante no existía relación laboral, sino un contrato de prestación de servicios o corretaje, por lo que no se probó la mala fe, siendo éste un requisito esencial para que la sanción emerja.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Los apoderados judiciales de las partes presentaron recurso de apelación en los siguientes términos:

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.

El apoderado de la accionante manifestó que tiene un solo reparo contra la sentencia de primera instancia, en lo que tiene que ver con la absolución de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, toda vez que considera que la demandante sí reclamó sus derechos laborales a la accionada, pues la llamó a conciliar, así da cuenta el acta de la reunión, es decir, sí le reclamó a la empresa SODEIMPRO S.A. sus prestaciones sociales, por lo que estima que en este caso la indemnización moratoria sí debe proceder.

APELACIÓN DE LA DEMANDADA.

El apoderado judicial de SODEIMPRO S.A., manifestó que el juzgado de instancia interpretó de manera errónea las pruebas que aportó la parte demandada que tienen que ver inicialmente con la inexistencia de un vínculo laboral entre demandante y demandada, porque se establece con claridad que los pagos que se le hicieron a través de SODEIMPRO S.A., el NIT que aparece reportado en los extractos bancarios, fueron hechos en virtud de una prestación comercial de servicios.

Indica, que el Despacho tampoco tuvo en cuenta que de esos mismos extractos, se aprecia que la demandante percibía emolumentos de otras entidades, de manera que eso desvirtúa que la actora hubiera prestado sus servicios a SODEIMPRO S.A. de manera permanente y exclusiva, por lo que al margen de que esas consignaciones provengan de Cooperativas que se dediquen a un fin u objeto social semejante, demuestra que la señora Diana prestaba sus servicios no solamente a SODEIMPRO S.A., sino a otras entidades, tal y como se afirmó desde la contestación de la demanda.

De otro lado, solicita que se estudie con rigor la declaración rendida por la testigo LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ, en el sentido que ésta tiene un interés

evidente en las resultas de este proceso, ya que lo que se defina en este caso, le serviría para afrontar el proceso propio.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado judicial de la demandante presentó escrito de alegatos anotando resumidamente lo siguiente:

1. Quedó demostrado con las respectivas cuentas de cobro y el testimonio de la testigo LEIDY ELIZABETH GALEANO que la demandante devengaba más del salario mínimo mensual, sin embargo, el Juez de primera instancia falló con base en un salario mínimo.
2. El Despacho de primera instancia no tuvo en cuenta que la demandante tuvo que acudir ante el Ministerio del Trabajo para reclamar el pago de sus prestaciones sociales. No obstante, la demandada insistió en que se trataba de un contrato de prestación de servicios para evadir su obligación del pago de dichas prestaciones sociales. Lo que demuestra una mala fe.
3. Pese a que la demandada no pudo romper la presunción que establece el artículo 24 de C.S.T, el Despacho de primera instancia le impuso a la demandante el pago del 25% del pago a la seguridad social y el 75% a la demandada, cuando debería ser la demandada la obligada a pagar el 100% de tal concepto, tal como lo ordena la normatividad colombiana,

Por las razones anteriormente expuestas le solicito respetuosamente al honorable magistrado lo siguiente:

- Revocar la decisión en cuanto a la negación por parte del Juez de primera instancia de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 C.S.T.
- Revocar la decisión en cuanto a la imposición del pago del 25% de la seguridad social, y que sea la demandada la que pague el 100% de la misma, toda vez que, es la demandada la culpable de que no se haya pagado tal concepto oportunamente.
- Hacer uso de los principios ultra y extra petita, en pro de la defensa de los derechos de la demandante.
- Condenar en costas a la demandada.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si en el proceso se probó, que, entre la demandante y la demandada SODEIMPRO S.A., existió contrato de trabajo, y si de haberse probado, hay lugar al pago de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

6. CONSIDERACIONES:

La decisión del recurso de apelación presentado por las partes, se proferirá atendiendo lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, referente al principio de consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad al sustentarse el referido recurso.

En razón a lo anterior, los aspectos que fueron introducidos por el apoderado de la actora en los alegatos de segunda instancia como inconformad con el fallo de primera instancia, distintos a la indemnización moratoria del Art. 65 del CST único asunto apelado, no serán objeto de decisión es esta instancia.

Para resolver lo que a esta instancia compete, deberá esta Sala establecer primeramente si se encuentra acreditada o no la existencia de una relación de trabajo entre las partes como se afirma en la demanda, de la cual puedan derivarse el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones y aportes a la seguridad social deprecados por la actora y que fueron objeto de condena en primera instancia.

Sea lo primero señalar que, en cuanto a la carga probatoria, el artículo 167 del CGP dispone que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”*

De otra parte, en los juicios de trabajo resulta de fundamental importancia establecer la existencia del contrato de trabajo entre las partes, como fuente de la cual devienen los derechos laborales que se reclaman.

En el presente caso, existe controversia entre las partes sobre la existencia del contrato de trabajo, pues mientras la parte demandante afirma que lo hubo, la parte

demandada lo niega tajantemente, aduciendo que lo que existió fue un contrato de prestación de servicios.

En cuanto al contrato de trabajo, el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, lo define como un acto jurídico que se celebra entre una persona natural denominada trabajador y una persona natural o jurídica llamada empleador, a través del cual el trabajador se compromete con el empleador a la prestación personal de un servicio bajo su continuada subordinación y dependencia del empleador, para recibir como contraprestación una remuneración denominada salario.

A su vez, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone que son elementos esenciales del contrato de trabajo, la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario como retribución, y el artículo 45 ibídem precisa que el contrato de trabajo puede celebrarse por un tiempo determinado; por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada; por un tiempo indefinido; o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Según los artículos 37 y 38 del mismo código, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario, y cuando se trate de un contrato verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de: I). La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; II). La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; y III). La duración.

Por otra parte, en materia laboral en el sector privado, existe conforme al artículo 24 del C.S.T. subrogado por el Art. 2 de la ley 50 de 1990, la presunción que toda prestación personal continua de un servicio, está regida por un contrato de trabajo, pero es esta una presunción de hecho que puede ser desvirtuada mediante la prueba correspondiente, por lo que le traslada al convocado como empleador a desvirtuarla, y probar lo contrario, es decir, que la relación entre las partes está enmarcada en otro tipo de negocio jurídico diferente al laboral, si es su intención exonerarse de las obligaciones que del contrato de trabajo se derivan.

En atención a la norma mencionada en el párrafo anterior, le corresponde al pretendido trabajador, probar la prestación personal del servicio y al demandado como empleador, acreditar que el servicio prestado por quien alega haber tenido una relación laboral, se desarrolló en los términos de un contrato con ausencia de **subordinación** laboral, es decir que en los procesos donde se demanda la declaración de trabajo donde no está en discusión la prestación personal del servicio, se invierte la carga de la prueba,

debido a que quien alega haber sido trabajador no le corresponde probar que lo era, sino a la parte demandada probar que no lo era.

Al respecto se pronunció la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3126-2021, providencia en la que señaló lo siguiente:

“Por último, debe destacarse que para configurar la existencia de un contrato de trabajo no es indispensable la demostración plena de los tres elementos denominados esenciales en el referido artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Pensarlo así haría nugatoria la presunción legal del artículo 24 ibidem, conforme a la cual basta la demostración efectiva de la prestación personal del servicio para que el contrato de trabajo se presuma, sin que se requiera prueba apta de la subordinación pues una vez aquella opera le corresponde a la contraparte desvirtuarla.”

Por lo tanto, en este caso bastaba que la señora DIANA LUCÍA PALACIO MONTOYA probara que había prestado sus servicios personales a la sociedad demandada SODEIMPRO S.A. para presumirse la existencia del contrato de trabajo, y como de manera acertada lo adujo el *a quo*, en este caso se probó esta prestación personal del servicio, hecho que no fue puesto en tela de juicio por la accionada, ya que en la contestación de la demanda, aceptó que la señora DIANA LUCÍA, prestó sus servicios personales desde el mes de octubre de 2012, hasta el mes de julio de 2017, por lo tanto, le correspondía a la sociedad demandada acreditar que no se trataba de una relación subordinada de tipo laboral, sino de una relación comercial como lo alega, que no estaba sometida a ningún tipo de subordinación.

Frente al tema, es importante acotar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencias del 25 de septiembre de 2003, radicado 20.311, y del 11 de octubre de 2011, radicado 23587, ha precisado que en los contratos civiles o mercantiles, no es extraño a que existan instrucciones, controles y supervisión del contratante sobre el contratista, toda vez que en las relaciones donde hay obligaciones recíprocas, se estipulan deberes que deben ser cumplidos y no necesariamente son órdenes que impliquen subordinación.

Por ejemplo, dicha corporación en sentencia SL 9801 del 29 de julio de 2015, radicado 44519, precisó que el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas de tal relación, en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y dependencia propios del contrato de trabajo, pues estas últimas son de naturaleza distinta.

En el presente caso, a pesar que la sociedad accionada afirma que tenía un contrato de naturaleza comercial con la demandante, no existe dentro del plenario escrito

referido al supuesto contrato.

De otro lado, la parte demandada tampoco solicitó pruebas testimoniales con las cuales se pudiera desvirtuar la presunción que pesaba en su contra, y en este aspecto, es importante poner de presente que en los procesos del denominado “*contrato realidad*”, la prueba fundamental es la testimonial y la de interrogatorio de parte, para establecer si en el desarrollo de la prestación del servicio se presentó subordinación de tipo laboral, particularmente en lo atinente a la libertad de horario o la imposición del mismo, el deber de cumplir órdenes que le imponga el contratante al contratista y otros elementos que son ajenos al contrato civil de prestación de servicios personales u otro tipo de contrato comercial o civil, toda vez que las pruebas documentales poco o nada sirven para resolver este tipo de litigios, salvo que las mismas contengan manifestaciones de subordinación.

En la contestación de la demanda, se aprecia que la sociedad accionada manifiesta en respuesta al hecho tercero del libelo, que hace referencia al cargo desempeñado por la actora como asesora comercial y a las órdenes que recibía del personal de SODEIMPRO S.A., que los diferentes funcionarios de la demandada, le daban instrucciones a la demandante sobre su vínculo comercial para que de esta manera pudiera desarrollar mejor sus funciones, pero como ya se dijo este no necesariamente implica la existencia del contrato de trabajo, pues en otros tipos de prestación de servicios personales, el contratante puede dar instrucciones a contratista sobre la forma de realiza la labor.

También refiere el apoderado de la accionada que se debe analizar con sumo cuidado la declaración de la testigo **LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ**, pues ésta manifestó en su declaración que también tenía un proceso en contra de SODEIMPRO S.A. por hechos similares, por lo que podría tener una intención en las resultas de este proceso, no obstante, no efectúa la mínima explicación de qué aspectos de la declaración de la testigo presenta dudas o reproche, destacándose que sobre dicha declaración no se presentó tacha alguna, y sin que la Sala halle que con los dichos de la testigo se desvirtué la citada presunción de la existencia del contrato de trabajo, pues esta declarante manifestó que la actora recibía órdenes del personal de SODEIMPRO S.A., pero sin especificar en que consten esta ordenes, encontrándose que esta testigo, se enfocó más en relatar cómo se desarrollaba su relación con SODEIMPRO, o de manera genérica, sin ofrecer mayores detalles de cómo era la de la demandante con SODEIMPRO, sin embargo, esto no hace que se desvirtúe la presunción del Art. 24 del CST sobre la existencia del contrato de trabajo, pues como

ya se dijo, quien tenía la carga de destruir la presunción del contrato de trabajo, acreditando la ausencia de subordinación laboral, era la sociedad accionada.

Así las cosas, encontrándose plenamente acreditada la prestación personal del servicio de la demandante para SODEIMPRO S.A., se activaba en favor de la accionante la presunción de existencia de relación laboral contenida en el artículo 24 del CST, sin que ningún esfuerzo probatorio hiciera la demandada para acreditar lo contrario, pues los hechos presumidos referidos a la existencia de un verdadero contrato de trabajo entre las partes, no se ven desvirtuados ni con la prueba documental, ni con el testimonio de la señora LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ, así como tampoco del interrogatorio de parte a la demandante que fue practicado de forma oficiosa por el juez de instancia, pues en este no se encuentra confesión alguna en su contra, quedando incólume la presunción, sin que logre ser derruida, por lo que se CONFIRMARÁ la sentencia en cuanto declaró la existencia del contrato de trabajo, por la presunción del Art. 24 del CST.

Ahora, el apoderado de la demandada afirma en el recurso de apelación, que los extractos bancarios que fueron allegados al proceso, dan cuenta que la demandante no solo percibía emolumentos por parte de SODEIMPRO S.A., sino también de otras Cooperativas, lo que demuestra que la actora no tenía un contrato de exclusividad con la demandada.

Respecto del anterior asunto, escuchado el testimonio de LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ, al ser preguntada si ella tenía tarjetas de presentación, indicó que a lo último ella si las tenía, al igual que volantes, en los que aparecía además de los logos de SODEIMPRO los de otras Cooperativas, pero indicando que *“los logos son de ustedes”* refiriéndose a SODEIMPRO, afirmando que estas Cooperativas son del mismo dueño, porque Luz Marina Cortez Vanegas era la que mandaba a hacer la papelería, el volante, que dijera todas las Cooperativas por si llegaban a cofinanciar, y todo el tiempo manejaron esas Cooperativas

También afirmó la testigo que en SODEIMPRO había unos asesores de planta que cree que ganaban \$1.000.000, y que su remuneración (la de la testigo) oscilaba en 5 millones de pesos y Diana como 3 millones de pesos

De otra parte, en el interrogatorio de parte rendido por la demandante, al ser preguntada si tenía que prestar servicios exclusivamente a SODEIMPRO, esta manifiesta que sí, que en las llamadas le dijeron que tenía que contestar siempre SODEIMPRO, siempre tenía que referirse a SODEIMPRO. Más adelante la actora

hace referencia a que los pagos semanales de las cuentas de cobro que pasaba se los hacía SODEIMPRO, pero también dice que en su defecto cinco Cooperativas, de las que no se escucha bien sus nombres, pero, termina diciendo *“que pertenecen a ellos mismos”*

Así las cosas, entiende la Sala que el reproche que realiza la sociedad demandada, en la apelación, va dirigida a que la accionante no solo le prestaba servicios a SODEIMPRO, sino a otra Cooperativas, lo que en principio podría hacer inaplicable, la presunción del Art. 24 del CST, pues la prestación personal del servicio que él establece tendrá que ser esencialmente, a favor de quien se invoca el contrato de trabajo.

No obstante lo anterior, en el proceso, no se probó que la accionante, le prestara servicios a las cinco Cooperativas de las que hace mención la actora, las que si bien se acredita que sí le hacían pagos a la demandante, pues incluso el juez así lo entendió al no tomar todos los pagos que ingresaron a su cuenta bancaria, como salario, precisamente porque los mismos no eran efectuadas por SODEIMPRO, tomando el salario mínimo legal para imponer las condenas, todo esto solo prueba que a la accionante, le hacían pagos por las Cooperativas, no que les haya prestado el servicio a estas, siendo relevante que si bien, tanto la actora como la testigos sí hacen referencia a algunas Cooperativas, también manifestó la testigo que: *“los logos son de ustedes”* y la demandante: *“que pertenecen a ellos mismos”*, por lo que en conclusión no queda probado que la accionante le prestaba el servicio a las referidas Cooperativas, en las oficinas ubicadas en el municipio de Bello, donde afirma que le prestaba sus servicios a SODEIMPRO S.A., reportando su trabajo a sus oficinas de Medellín,

Por lo anteriormente explicado, no puede prosperar la apelación de la sociedad demandada sobre el tópico que la demandante no tenía exclusividad de la prestación del servicio a SODEIMPRO S.A., por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia, sobre la declaratoria de la existencia del contrato de trabajo, pero por la presunción del Art. 24 del CST, la que no se vio desvirtuada, y sin que se haga necesario revisar los aspectos de las condenas impuestas, por cuanto no fueron objeto de inconformidad en la apelación de la sociedad demandada.

Se pasa entonces a resolver sobre la apelación de la parte demandante, en lo relativo a su única oposición con el fallo del *a quo*, referida a la absolución de la indemnización moratoria del Art. 65 del CST

El juez para negar tal pretensión indicó que el tema de la existencia del contrato de trabajo, solo surgió cuando la actora acudió a la administración de justicia, porque la demandante nunca tuvo conducta tendiente a reclamar sus derechos, y que SODEIMPRO tenía el convencimiento que con la demandante no existía una relación laboral, por lo que no emerge la mala fe de la sociedad demandada.

Respecto de los anteriores argumentos, en la apelación solo se ataca el primero, aduciendo que la demandante la llamó a conciliar a la empresa SODEIMPRO S.A., de lo que da cuenta el acta de la reunión, es decir, sí le reclamó sus prestaciones sociales, sin efectuar ninguna inconformidad con el segundo argumento que esta sociedad actuó de buena fe al tener el convencimiento que con la demandante no existía una relación laboral, por lo que al no atacarse este segundo argumento, así se tuviera razón en el primero, la decisión se debe mantener.

Ahora si en gracia discusión se debiera revisar ampliamente el tema sin consideración a los argumentos de la apelación, en lo que atañe a la **indemnización moratoria del artículo 65 del CST**, ha sido criterio de la Sala, no puede ser resuelta por el mismo sendero que conllevó a declarar la existencia de la relación de trabajo, es decir la presunción que establece el art. 24 del CST, pues ya la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral ha precisado que para la sanción en comento no es automática sino que debe estudiar la presencia de buena o mala fe en el impago, y en el caso que la mala fe debe ser estudiada a la luz de las pruebas que obren en el proceso sobre todo circunstancias que pudieron dar lugar a la declaración de la existencia de la relación de trabajo, es decir, si la misma se encontraba presente de bulto o pudiera existir una duda o circunstancias que pudiera hacer pensar fundadamente a la parte demandada que no estaba frente a la presencia de una relación laboral, por cuanto para su imposición resulta necesario auscultar la conducta asumida por el empleador en el no pago de los salarios y/o prestaciones sociales adeudadas al asalariado, ya que sólo cuando la actitud omisiva se encuentra revestida de mala fe, resulta procedente fulminar condena por dicho concepto, más no cuando tal incumplimiento obedece a razones atendibles y justificables de tal proceder.

En sentencia SL11436-2016, la alta Corporación indicó que:

“En cuanto a la manera como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador, de cara a la imposición de la sanción por mora y a la inexistencia de parámetros o reglas absolutos, esta Corporación en sentencia de la CSJ SL ,13 abr. 2005, rad. 24397, explicó: ... deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina...”, como lo dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6658.

“Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro.”

En ilación con lo anterior, en los casos que ante la intervención del juez como árbitro para resolver la duda sobre la existencia de una relación de trabajo, hay una ausencia de prueba para establecer las circunstancias en que se desarrolló la prestación personal del servicio que dio lugar a aplicar la presunción de la existencia del contrato de trabajo, declarándose el mismo no por prueba directa de la existencia de la subordinación laboral, sino por la presunción del Art. 24 del CST, se hace imposible determinar la existencia de la mala fe de la sociedad demandada, en la omisión en el pago de las prestaciones sociales.

Como se explicó anteriormente, si bien con el testimonio de LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ, no se prueba la existencia de la subordinación laboral, por ser sus dichos genéricos, sin enfocarse particulares en el caso de la accionante, sino más bien referidos a ella, la declaración de la existencia del contrato de trabajo, se mantiene por la presunción del Art. 24 del CST como ya se explicó, por lo que la desconocerse con prueba directa, contundente y suficiente, de cómo se desarrolló la prestación de servicio de la actora, no es posible evaluar la buen o mala fe en el impago de sus prestaciones laborales, lo que conllevaría en todo caso, a absolver al accionado del pago de la indemnización en comento, pues la mala fe no puede ser presumida, al no existir mandato legal que disponga ello.

Adicionalmente, no encuentra la Sala, que el actuar de la demandada SODEIMPRO S.A. estuviera encaminada perjudicar económicamente a la accionante, omitiendo el pago de sus prestaciones laborales, pues la testigo LEIDY ELIZABETH GALEANO QUIROZ, indicó que un empleado de planta de esta sociedad que realizaba la misma labor, devengaba \$1.000.000, y la remuneración de la demandante era de al menos \$3.000.000 mensuales o más como ella misma lo indico al absolver el interrogarlo de parte, lo que denota que de haberla vinculado con contrato de trabajo con prestación laborales, habría percibido una suma anual inferior a la que devengaba un empleado de planta que realizaba la misma labor.

Finalmente es necesario manifestar que en los alegatos de conclusión el apoderado judicial de la parte demandante solicita que además de revocar y proceder a condenar a la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 C.S.T., también se revoque la imposición del pago del porcentaje de aportes a la seguridad social que corresponde a la demandante y que se haga uso de los principios ultra y extra petita en pro de la

defensa de la actora, no obstante, estos aspectos tampoco se expusieron al momento del recurso de apelación, de manera que, la Sala atendiendo el mandato del Art. 66A del CPT y la SS, no puede resolver asuntos que no fueron objeto de la alzada.

Por las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en pretendencia, la decisión de primera instancia será confirmada en los términos anteriormente expuestos.

Sin costas en esta instancia por haber sido vencidas ambas partes en el recurso de apelación.

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 02 de septiembre de 2021 proferida por el JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **DIANA LUCÍA PALACIO MONTOYA** contra la **SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S.A. SODEIMPRO S.A.**

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes intervinieron en la decisión, los magistrados,



ACLARACIÓN DE VOTO JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Demandante : DIANA LUCÍA PALACIO MONTOYA
Demandado : SOCIEDAD DE INVERSIONISTAS Y PROVEEDORES S.A.
SODEIMPRO S.A.
Radicado : 05001-31-05-014-2019-00442-01.

Me permito presentar la siguiente ACLARACIÓN DE VOTO, lo que significa que estoy de acuerdo con las decisiones tomadas en el caso de la referencia, pero con el siguiente matiz:

1.- En punto al análisis de la indemnización moratoria, se exonera de ella a la entidad demandada, básicamente argumentándose que cuando se declara la existencia del contrato de trabajo por el sendero de la presunción del artículo 24 del C.S.T., no procede dicha sanción.

2.- Tal posición puede entenderse en el sentido de que dicha presunción se aplicaría ante la ausencia de pruebas directas para establecer las circunstancias en que se desarrolló la prestación personal del servicio, tal como se advierte en el proyecto mismo. Es decir, que cuando esto ocurre, se queda el juzgador sin elementos de juicio suficientes para poder evaluar si el empleador observó o no una conducta de buena fe o, por el contrario, asumió un comportamiento consciente pero reprochable en detrimento de los intereses del trabajador.

3.- Sin embargo, mi aclaración va en el sentido de que, a mi juicio, no se puede ser absoluto en esta afirmación, esto es, que **siempre** que se declare la existencia del contrato de trabajo por vía de la presunción del artículo 24

del C.S.T., tenga indefectiblemente que exonerarse de la sanción moratoria. Cada caso trae sus propias particularidades, y deberán ser analizadas en concreto para determinar lo pertinente. De allí que no es posible comprometer, desde ahora, el criterio de manera dogmática para cuando se deba valorar un caso similar, pero con posibilidades diversas de solución.

Fecha ut supra.

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ
Magistrado.

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia
Firma Con Aclaración Parcial De Voto

Código de verificación: **1caca463cbf4dafb7df9e94a665b2ec7fca82f8effcf1e5420307189f9e30654**

Documento generado en 12/03/2024 01:39:09 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>